

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO III

ACTUACIONES N°: 1080/19



H103034129106

**JUICIO: CORONEL ANGEL DAMIAN c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS
EDIFICIO CALLE BALCARCE 873/879 Y SORIA ALVARO ESTEBAN s/
COBRO DE PESOS. Expte. N° 1080/19.**

San Miguel de Tucumán, 18 de noviembre de 2022.

REFERENCIA: Para dictar sentencia definitiva en la causa caratulada “Coronel Angel Damian c/ Consorcio de Propietarios Edificio Calle Balcarce 873/879 y Soria Álvaro Esteban s/ cobro de pesos. Expte. N° 1080/19”, sustanciada ante este Juzgado del Trabajo de la III Nom.

ANTECEDENTES

Por presentación del 23/08/2019 se apersonó el letrado Gerardo Joaquín Arch en representación del Sr. Ángel Damián Coronel, DNI N° 33.977.037, con domicilio en La Rioja Este 404, Tafí Viejo, provincia de Tucumán, conforme lo acredita con el poder ad-litem (poder especial gratuito para este tipo de juicios) que acompañó con el escrito inicial de demanda.

En el carácter que invocó, inició demanda laboral por cobro de pesos en contra de Consorcio de Propietarios Edificio Calle Balcarce 873/879, con domicilio en calle Balcarce 873 de esta ciudad; y en contra del Sr. Álvaro Esteban Soria, con domicilio en calle Córdoba 184 de esta ciudad.

Persigue el cobro de la suma de \$366.161,42 (pesos trescientos sesenta y seis mil ciento sesenta y uno con 42/100), conforme planilla indemnizatoria que adjuntó con los siguientes rubros: indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional 2018, vacaciones proporcionales 2018, integración mes de despido, SAc s/ integración y preaviso, indemnización arts. 1 y 2 Ley 25323, diferencias salariales desde julio de 2016 a junio de 2018

Manifestó que el actor ingresó a trabajar en el edificio de Consorcio de Propietarios Edificio Calle Balcarce nº 873/879, 02/06/2015, como Portero suplente de jornada completa, según la categoría prevista en el art. 7 del CCT 589/2010. Señaló que el trabajador fue registrado por el Sr. Alvaro Esteban Soria, quien fue el administrador del edificio aludido, por lo tanto, afirmó que, éste como el consorcio son solidariamente responsables.

Añadió que el trabajador cumplía servicios todos los días domingos de 07:00 hs. a 19:00 hs., todos los días feriados de 08:00 a 20:00 hs. y, además, cubría reemplazos de los otros trabajadores 2 o 3 veces por semana, en horario nocturno de 20:00 hs. a 06:00 hs. En cuanto a las tareas, señaló que el actor realizaba control de acceso de personas al edificio, realizaba control de elementos de seguridad del edificio, control de funcionamiento de ascensores, tareas de limpieza, entre otras.

En relación al distracto, señaló que el día 20/05/2018 el trabajador se apersona en el edificio para cumplir sus tareas habituales y el personal de seguridad que se encontraba en el mismo, le impiden el ingreso a su lugar de trabajo. Ante ello, el trabajador remitió TCL 091772730 de fecha 29/05/2018 al Consorcio Edificio Balcarce 873/879, solicitando se aclarara su situación laboral, bajo apercibimiento de considerarse despedido. Destacó que dicha misiva no fue recibida por persona alguna, y el correo argentino dejó aviso de vista, y devolvió al remitente la pieza postal. Considera que la notificación cumplió su efecto ya que el correo dejó el aviso de visita y la demandada no reclamó la pieza postal. Asimismo, señaló que remitió misiva semejante al Sr. Soria.

Seguidamente, señaló que el día 26/06/2018 procedió a considerarse despedido por la negativa de recibir misiva anteriormente referida, por parte del consorcio de propietarios. Misma situación describió en referencia al Sr. Soria.

Manifestó que luego de más de un mes, el consorcio procedió a contestar las misivas señaladas, negando la relación laboral; y el Sr. Soria, negó haber incurrido en silencio e invocó que había convocado al actor a trabajar. Posteriormente, señaló que el Sr. Soria de manera extemporánea procedió en fecha 31/10/2019 a intimar al trabajador a que retomara sus tareas y, finalmente, el 05/12/2018 procede a despedir al actor.

Por otra parte, señaló que el trabajador hizo reclamo ante la Secretaría de Estado de Trabajo, y con el Sr. Soria procedió

a realizar convenio conciliatorio por la suma de \$20.000, y sólo cobró la suma de \$12.000.

Por último, adjuntó planilla de rubros indemnizatorios y prueba documental.

Corrido traslado de demanda, se apersonó la letrada María Beatriz Gallo, apoderada del Consorcio de Propietarios Edificio Calle Balcarce 873/879. En tal carácter, realizó una negativa particular de los hechos invocados por el actor.

Al ofrecer su versión de los hechos, expresó que el Sr. Ángel Damián Coronel no fue empleado de su mandante, ni prestó tareas de ningún tipo en el edificio. Señaló que el trabajador fue empleado del Sr. Soria, quien se desempeñó como administrador del consorcio.

Señaló que el día 20/05/2018 el trabajador alegó que se presentó en el domicilio del consorcio para desempeñar sus tareas, y se le impidió el ingreso por personal de seguridad. Ante ello, manifestó que nadie pudo haberle impedido el ingreso del personal de seguridad porque el edificio no cuenta con ello y, además, porque el único que tendría esa facultad sería el Sr. Soria por ser el empleador del Sr. Coronel; y, afirmó que en la fecha referida el Sr. Soria ya no era administrador del consorcio.

Además, manifestó que no recibió misiva del 29/05/2018, ni aviso de vista alguno. Señaló, que el telegrama Ley 092795526 por el cual el trabajador se consideró despedido, fue recibido por su mandante, y ante ello procedió a negar las imputaciones vertidas en dicha comunicación.

Manifestó que ante el acuerdo conciliatorio celebrado en Secretaria de Trabajo, entre el trabajador y el Sr. Soria, se acondicionó el segundo pago, a la cancelación de una deuda por parte del consorcio con el Sr. Soria, lo que no puede implicar una veracidad de los hechos de la demanda.

Finalmente, solicitó que se rechace la demanda con imposición de costas al actor y acompañó prueba documental, conforme surge de presentación de fecha 07/10/2019.

En cuanto al codemandado, el Sr. Álvaro Esteban Soria, procedió a contestar demanda. Se apersonó el letrado Diego Ezequiel Guzmán, apoderado del codemandado. En tal carácter, realizó una negativa particular de los hechos invocados por el actor.

Al ofrecer su versión de los hechos, expresó que el Sr. Soria se dedica a la administración de ciertos edificios ubicados en la provincia, habiendo sido un su momento administrador del consorcio de Propietarios del Edificio de calle Balcarce N° 873/879.

Señaló que su mandante contrató al actor el 02/06/2015 a fines de desempeñarse laboralmente en el edificio de calle Balcarce 873/879 en tareas de seguridad y vigilancia.

Reconoció que si bien procedió a despedir al trabajador el 05/12/2018, el trabajador se colocó en situación de despido el 26/06/2018, lo que puso fin a la relación laboral. Además, reconoció fecha de ingreso y egreso, y causal de desvinculación invocados por el actor.

Señaló que la jornada laboral del trabajador fue únicamente los días domingos de 07:00 a 19:00 hs., en la categoría de "Personal de vigilancia con jornada reducida", del CCT 589/10. En cuanto a las tareas, manifestó que el actor realizó vigilancia del edificio, control de ingreso y egreso de personas y vehículos.

Manifestó que el edificio donde el actor prestó servicios, contaba con personal de portería contratado por el consorcio, y que su mandante contaba con distintos empleados que realizaban tareas de vigilancia y reemplazos.

Además, señaló que su mandante realizó un convenio de desvinculación con el actor, por el que reconoció pagarle las indemnizaciones. Afirmó que si bien acordó pagar \$20.000, solo abonó la suma de \$12.000, pero ese monto cubre los rubros de indemnización por antigüedad, preaviso, sac s/ preaviso, integración mes de despido, sac s/ integración, vacaciones y aguinaldo proporcional.

Procedió a impugnar planilla adjuntada por el actor, planteó excepción de pluspetición inexcusable, y de prescripción.

Finalmente, solicitó que se rechace la demanda con imposición de costas al actor y acompañó prueba documental, conforme surge de hoja 165.

El 11/02/2020 la presente causa se abrió a pruebas por el término de 5 días al solo fin de su ofrecimiento.

Posteriormente, el 11/08/2020 se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el art. 69 del Código Procesal Laboral (CPL), donde las partes expresaron la imposibilidad de conciliar.

Se destaca, que conforme surge de decreto del 21/09/2020 se apersonó el letrado Raúl Agustín Basilio como apoderado

del actor.

Concluido el período probatorio, atento a lo prescripto por el art. 101 del CPL, se confeccionó informe al actuario.

Del mismo surge que la parte actora ofreció 7 cuaderno de prueba, a saber: 1-Reconocimiento: producida digitalmente; 2-Informativa: producida digitalmente; 3-Instrumental: producida digitalmente; 4-Exhibición de documentación: producida digitalmente; 5- Pericial contable: producida digitalmente; 6-Confesional: sin producir digitalmente; 7-Testimonial; producida digitalmente

La parte demandada (Consortio de Propietarios Edificio Calle Balcarce 873/879) ofreció 4 cuadernos de prueba: 1-Instrumental; 2- Informativa: producida digitalmente; 3-Confesional: producida digitalmente; 4- Informativa: producida digitalmente.

La parte codemandada (Álvaro Soria) ofreció 5 cuadernos de prueba: 1- Instrumental: producida digitalmente: 2-Reconocimiento: producida digitalmente; 3- Informativa: producida digitalmente; 4-Confesional: producida digitalmente; 5- Pericial contable: producida digitalmente (acumulada a A5)

Puestos los autos para alegar, los días 06/09/2022, 12/09/2022 y 19/09/2022 las partes presentaron sus alegatos, en tiempo y forma, conforme proveído del 19/09/2022.

Finalmente, el 13/10/2022 se ordenó pasar los presentes autos a despacho para el dictado de la sentencia definitiva, y firme la providencia, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.

ANÁLISIS DEL CASO Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA

1. Corresponde, en forma previa, excluir aquellos extremos y documentación que se encuentran reconocidos expresa o tácitamente por las partes y, por ende, exentos de prueba.

Por lo que, en relación a las posiciones asumidas por las partes respecto de los extremos de la relación laboral y la documental por éstos acompañada, concluyo que se tiene por cierto por no haber sido controvertido o impugnado por la partes (art. 60 CPL): a) la existencia de una relación laboral que vinculó al Sr. Coronel bajo la dependencia del Sr. Álvaro Esteban Soria, cuyas características fueron: fecha de ingreso el 02/06/2015; ámbito de desempeño en el edificio ubicado en calle Balcarce 873/879; el trabajador realizó tareas de vigilancia, control de acceso de personas y vehículos; y que el CCT aplicable fue el 589/10.

2. En cuanto a la documentación acompañada por la parte actora, el demandado Consorcio de Propietarios realizó una negativa particular de los siguientes documentos: acta policial del 28/05/2019, TCL del 29/05/2018, aviso de visita, acuerdo conciliatorio celebrado el día 05/12/2018. Respecto a la restante documentación, hubo silencio de parte del demandado, por lo que considero tener por auténtica la instrumental no desconocida y que se le atribuyen al consorcio accionado, tanto en original, como en copias, de acuerdo a lo previsto en el referido art. 88, consonante con el art. 331 del CPCYC, supl., sin que obre prueba en contrario, criterio que también sostiene el máximo Tribunal local (CSJT, Sent. N° 318 del 04/05/2000, "Posse Aida Elizabeth vs. RU-MAR Turismo y Otros/Cobros").

2.1. Por otra parte, el codemandado Álvaro Esteban Soria, procedió a realizar una negativa particular de los siguientes documentos: dos fotografías, contenido de detalle de gastos comunes y anticipos correspondientes al mes de febrero de 2018, expensas del mes de septiembre de 2016, liquidación expensas ordinarias n° 50, expensas mayo 2016; expensas ordinarias n° 46, aviso de retorno del 05/06/2018. Respecto a la restante documentación, hubo silencio de parte del codemandado, por lo que considero tener por auténtica la instrumental no desconocida y que se le atribuyen al Sr. Soria, tanto en original, como en copias, de acuerdo a lo previsto en el referido art. 88, consonante con el art. 331 del CPCYC, supl., sin que obre prueba en contrario, criterio que también sostiene el máximo Tribunal local (CSJT, Sent. N° 318 del 04/05/2000, "Posse Aida Elizabeth vs. RU-MAR Turismo y Otros/Cobros").

2.2. Respecto a la documentación presentada por la parte demandada -Consorcio de Propietarios-, y codemandada -Álvaro Soria-, surge que el Sr. Coronel si bien acudió a audiencia de conciliación oportuna no procedió a realizar el reconocimiento o desconocimiento de la citada documentación. Por lo que teniendo en cuenta el silencio del actor, corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en el art. 88 CPL y, en su mérito, tener por auténtica la documentación acompañada por el accionado referido.

3. En consecuencia, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las cuales debo pronunciarme, conforme al art. 214 inc. 5 del CPCYC, son las siguientes: 1) modalidad de contratación, demás tareas, categoría laboral y remuneración del trabajador; 2) extinción del contrato de trabajo: causa y justificación del

despido; 3) defensa de prescripción; 4) rubros: procedencia y cuantía: pluspetición inexcusable interpuesta por el codemandado Álvaro Esteban Soria; 5) responsabilidad solidaria del Consorcio de Propietarios del Edificio Calle Balcarce 873/879, por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo mantenido entre el Sr. Coronel y Sr. Soria.

Primera Cuestión

1. Controvierten las partes sobre la modalidad de contratación, demás tareas, categoría laboral y remuneración del trabajador.

1.2. El actor sostuvo que se desempeñó en una jornada laboral de 07:00 a 19:00 hs los días domingos; de 08:00 a 20:00 hs. los días feriados; y cubría reemplazos dos días, de lunes a viernes en horario nocturno de 20:00 a 06:00 hs..

Señaló que su ámbito físico de desempeño fue en el edificio de calle Balcarce 873/879 de esta ciudad, que debió estar registrado como portero suplente de jornada completa, y que realizó tareas de control de acceso al edificio, control de elementos de seguridad del edificio, control de funcionamiento de ascensores, control de ingreso de vehículos a cocheras, control de funcionamiento de montacargas para vehículos, limpieza de planta baja, ascensores y vereda del edificio, recolección de residuos en todos los pisos, entrega de correspondencia y repartos de diarios, boleta de impuestos y boletas de servicios a los departamentos del edificio.

Finalmente, manifestó que recibió en el mes de junio de 2018 una remuneración de \$1.524,80, y que debía percibir en dicho mes \$15.118,10.

1.3. Por su parte, el demandado -Consorcio de Propietarios- sostuvo que el actor no fue su empleado, ni prestó servicios para el edificio. Señaló que el actor fue empleado del sr. Álvaro Soria, quien fue administrador del edificio ubicado en Balcarce 873/879.

1.4. El codemandado, el Sr. Soria, sostuvo que el actor se desempeñó en una jornada laboral de 07:00 a 19:00 hs. sólo los días domingos, y que estuvo registrado en la categoría laboral de "Personal de Vigilancia con jornada reducida" del CCT 589/10.

Señaló que el actor realizó tareas de seguridad y vigilancia en el edificio ubicado en calle Balcarce 873/879, control de ingreso y egreso de personas y vehículos.

2. Ahora bien, corresponde determinar cuáles son las pruebas pertinentes y atendibles para resolver esta cuestión.

2.1. De los recibos de sueldos, acompañados por el actor, emitidos por Álvaro Esteban Soria, CUIT 20-23117459-2, correspondiente a los períodos de junio de 2015 a diciembre de 2015, febrero de 2016 a diciembre de 2016, febrero de 2017 a julio de 2018, surge que el Sr. Ángel Damián Coronel, estuvo registrado en la categoría laboral de Personal de Administración.

2.2. De la prueba de exhibición de documentación, que obra en el cuaderno de prueba A4, surge que el actor solicitó documentación laboral y contables a los demandados, y los que encontrándose debidamente intimados a dicho requerimiento, no presentaron lo solicitado por el actor.

Al respecto destaco, que la doctrina y jurisprudencia que comparto tienen dicho que, habiendo omitido exhibir la demandada las registraciones laborales y comerciales requeridas judicialmente por el actor, que estaba obligada a llevar se produce la inversión de la carga de la prueba sobre hechos que debieron consignarse en las mismas (CTr. "Heredia Nicolás Benito y otro vs. Frigorífico Lules y otros s/Cobro de Pesos, Sentencia n° 178, de fecha 23/11/10)

2.3. De la prueba de pericia contable, que obra en el cuaderno de prueba A5, surge que el perito Oscar Dante Sosa informó que el actor se encontraba registrado en la categoría laboral de Vigilador Diurno del CCT 589/10. Dicha pericia fue impugnada por el actor, por considerar que el perito no realizó lo solicitado por su parte.

Al respecto destaco, que las observaciones realizadas por la parte actora no son admisibles y por ende se rechazan, porque el informe pericial no evidencia vicios que lo invaliden; primero, porque sus conclusiones están fundadas en la documentación existente en autos; segundo, porque se ciñen a los cuestionarios propuestos por la parte; tercero, porque no hay pruebas que demuestren parcialidad del perito contador con los intereses de alguna de las partes, y cuarto porque no se probó que existan errores metodológicos en la valoración de los datos compulsados con prueba de igual jerarquía técnica. Así lo declaro.

2.4. De la prueba absolución de posiciones, que obra en el cuaderno de prueba A6, el demandado -Consortio de Propietarios-, no compareció a la audiencia de absolución de posiciones, lo que hace aplicable el art. 360 del CPCYC (supletorio), que permite tener por

confeso al mismo de las posiciones del pliego, en lo que refiere a los días y horarios de trabajo del Sr. Coronel en el edificio ubicado en Balcarce 873/879.

La doctrina que comparto tiene dicho que la confesión ficta produce los mismos efectos que la confesión expresa, vale decir, que resulta suficiente para tener por probados los hechos consignados en el pliego de posiciones. Sin embargo, no reviste como la segunda, el carácter de prueba tasada, ya que la ley faculta al juez a tenerla por configurada teniendo en cuenta las circunstancias de la causa, lo cual implica que es susceptible de desvirtuarse por prueba en contrario producida por los absolventes” (De Santos; La prueba judicial, Teoría y Práctica; Edit. Universidad; 1992, p. 296).

2.5. De la prueba testimonial, que obra en el cuaderno de prueba A7, surge declaración de los testigos Lucas Rodolfo Perdigón, Claudia Armas y Diego José Ruiz.

2.5.1. Respecto al testigo Perdigón, el Consorcio de Propietarios interpuso tacha en los dichos del mismo. Señaló que el testigo guarda una relación de amistad y complacencia con el actor, ya que declaró que iniciaba sus rondas aperiódicas a las 7 hs. hasta las 15 hs. como policía, siendo ello una hora después que el sr. Coronel ya no estaba en el lugar de trabajo - de 20 a 06 hs.-, por lo que no podría saber y haber visto al actor en su lugar de trabajo y en las tareas que señaló. Sostuvo que el testigo declaró, que el trabajador realizaba tareas de recibir correspondencia de OCCA lo cual es incorrecto. Por su parte, el codemandado Soria, también interpuso tacha en contra de los dichos del testigo, y afirmó que hubo inconsistencia en el relato del testigo, como así también no dio razón de sus dichos en las respuestas brindadas.

Es así que se abrió a prueba la tacha deducida, y se libró oficio a la Policía de Tucumán a fin de que informe si el testigo prestó servicios como policía y sobre el recorrido habitual de marzo de 2015 a julio de 2016; y a OCCA para que informe sobre los horarios y días en que se presta servicio de reparto de correspondencia.

De ellos surge, que el Sr. Jefe de Departamento Judicial de la Policía de Tucumán, informó que el Sr. Perdigón prestó servicios en Dirección Guardia Urbana desde el 19/12/2014 hasta el 18/11/2016, y a su vez éste organismo informó desconocer el recorrido que tuvo el referido en el periodo de marzo de 2015 a julio de 2016. Por otra parte, OCCA informó que presta servicios de reparto de correspondencia de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.

Ahora bien, por lo expuesto considero hacer lugar a la tachada interpuesta por los codemandados, en relación al testigo Perdigón, principalmente por no haber consistencia en su declaración.

En efecto, el testigo dijo en la respuesta n° 2: *“(...)yo me desempeñaba como personal policial del departamento general de policía, realizando tareas de prevención, en las intersecciones de Av Sarmiento, y calle Balcarce, con recorridos periódicos sobre calle Balcarce, y con especial atención al domicilio de Balcerce 869(...); a la repregunta 4 dijo: “El periodo asignado a mí, el inicio no se con exactitud de marzo del 2015, debería de corroborar eso, pero si sé que la fecha finalización por así decirlo, antes del 1ero de Agosto del 2016 ”; a la pregunta n° 8 dijo: “El cumplía funciones de portero, (...) recepción de correspondencia(...)”; y a la pregunta aclaratoria n° 3 y 7 dijo: “ yo lo veía durante el día los días domingos y feriados, y a la noche lo veía cuando yo iba a realizar el relevo , ya a la mañana porque el relevo se realiza 15 mn antes del horario asignado a la parada que es de 7 hs a 15 hs ; a ver de noche yo no lo veía porque mi horario era de 7 hs a 15 hs, y como lo veía recibiendo la correspondencia, cuando llegaban los Sres. de OCCA, él salía y recepcionaba”.*

En efecto, no surge de la información brindada por las entidades referidas anteriormente que el Sr Perdigón haya trabajado en las intersecciones de Av. Sarmiento, y calle Balcarce, con recorridos periódico sobre calle Balcarce, y en el año 2016. Tampoco surge que el trabajador haya realizado tareas de recibir correspondencia de OCCA, porque el testigo afirmó que veía al actor los días domingos y feriados durante el día -días en que no trabaja OCCA, ya que informó que se devuelve de lunes a viernes de 9 a 18 hs.- y siendo que los demás días el actor trabaja de noche, el testigo lo veía al momento de ingresar a su puesto de trabajo, esto es a las 7 de la mañana, cuando el actor se desenvolvía hasta las 6 de la mañana, horario que tampoco trabaja el correo OCCA.

Por todo lo expuesto, el testimonio brindado por el Sr. Perdigón no presenta credibilidad ni certidumbre, por no coincidir con la información objetiva brindada por las entidades referidas anteriormente. Por lo que corresponde hacer lugar a la tachada deducida por los codemandados.

2.5.2. Respecto a la testigo Armas, el demandado Consorcio de Propietarios interpuso tachada en los dichos del mismo. Señaló que el testigo guarda una relación de amistad y complacencia con el actor, y que hubo contradicciones en su relato. Por su parte, el

codemandado Soria, también interpuso tacha en contra de los dichos del testigo, y afirmó que hubo inconsistencia en el relato del testigo, como así también que se trató de un testigo de oídas.

En efecto, estimo que se trata de una testigo de oídas, al responder en varias preguntas de manera similar “ (...) *porque charlando con él me comentó (...)*”, y más aún la testigo ha accedido a ese conocimiento por lo transmitido por el propio actor y, además, por no brindar precisión en sus respuestas. En consecuencia, se hace lugar a la tacha deducida porque la deponente no ha captado el hecho sobre el que declara por vía de sus sentidos.

2.5.3. Respecto al testimonio de Diego José Ruiz, surge de las respuestas a las preguntas n° 4, 5, 6 y 7 que indagaban sobre el lugar donde trabajaba el actor en el periodo de marzo de 2015 a junio de 2018, sobre quien era su empleador, y sobre los días, horarios y tareas que realizaba el actor, el testigo dijo: *“En calle Córdoba 184, lo se por el tema de la fumigación que yo realizaba y tenía que coordinar con Coronel para ver los departamentos; Trabajaba para Diego Campi, era la que me mandaba para hacer la fumigación, el era el encargado del consorcio ; Coronel trabajaba los días domingos y feriados; El cuidaba la puerta de ingreso y hacía mantenimiento de limpieza en la planta baja y vereda”*.

De lo expuesto considero, que los elementos aportados por el testigo no resultan pertinentes para resolver la presente cuestión, en virtud que el testigo refiere a datos de la jornada laboral y tareas que habrían sido desarrolladas en otro lugar de desempeño que el trabajador podría o hubiere tenido, no haciendo referencia alguna al edificio ubicado en calle Balcarce 873/879. En consecuencia, el presente testimonio no se será tenido en cuenta como elemento probatorio relevante. Así lo declaro.

2.6. De la prueba de absolución de posiciones producidas por los demandados en los cuadernos de prueba D3 y C3, surge que el actor ratifica la posición asumida al momento de interponer la demanda, por lo que el presente medio de prueba no será considerado, al no aportar elementos útiles para la resolución de la presente causa.

Las restantes pruebas, las considero inconducentes para el esclarecimiento de la cuestión particular debatida.

3. Las pruebas pertinentes tratadas en el punto precedente, permiten arribar a las siguientes conclusiones:

3.1. En cuanto a la jornada laboral del trabajador, como se expuso, el actor denunció que se desempeñó en una

jornada a tiempo completo, y el codemandado Soria señaló que el actor trabajó en una jornada reducida.

Preliminarmente, cabe recordar que el contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado y a tiempo completo, resultando que la jornada parcial invocada por la demandada, configura un supuesto de excepción al régimen general de jornada establecido por el art. 197 de la LCT y la Ley 11544 y, por ese motivo, era la propia accionada quien debió haber aportado elementos probatorios suficientes para sustentar su posición.

El art. 198 de la LCT autoriza a las partes a reducir la jornada máxima legal mediante la estipulación particular inserta en un contrato individual, pero la existencia de tal limitación debe ser acreditada por el empleador.

Vale decir, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, con prestación continuada y con jornada legal, se presume; de allí que toda modalidad en la contratación que se aparte del tipo habitual deberá ser suficientemente acreditada por quien la invoque y con prueba contundente a tal efecto.

Si bien es cierto que, como principio general, correspondía al actor probar los extremos por él invocados, ello no es aplicable a lo atinente a la modalidad de registración utilizada. Cabe destacar que no se encuentra controvertido que el codemandado Soria fue el empleador del actor, y por dicha posición jurídica debía aportar elementos probatorios que demostraran la justificación del uso de la jornada reducida, por ser una excepción a la jornada normal prevista en la Ley 11544.

El Tribunal Cintero sostuvo que: “[...] *En las concretas circunstancias del caso, en el que el actor denunció la incorrecta registración de la jornada de trabajo y reclamó las diferencias salariales por haber laborado en jornada completa, circunstancia que fue negada por la demandada alegando la existencia de una jornada reducida, transgrede las reglas de distribución de la carga probatoria considerar que el trabajador no acreditó el horario de trabajo. No recaía en cabeza del actor la carga de acreditar la existencia de la jornada máxima legal; contrariamente, era la empleadora la que debía acreditar la existencia de una jornada laboral reducida en los términos y condiciones del art. 198 de la LCT [...] Si la demandada invocó como sustento de su defensa la existencia de una jornada laboral reducida, a ella corresponde probar que las partes pactaron la reducción de la jornada máxima legal [...]*” (CSJT, en la causa: "Navarro,

Felix Luis vs. Gepner, Martín Leonardo s/Cobro de Pesos", sentencia N° 760 del 07/09/2012).

Sin perjuicio de lo expuesto, el actor sustentó su versión invocada respecto a la jornada laboral, a partir de la prueba confesional aportada. Es así que surge que el actor trabajó los días domingos y feriados -posición n° 3- que prestaba servicios algunos días hábiles de la semana- posición n° 5-; y que además de los días domingos y feriados, cubría turnos como portero, dos o tres veces por semana en forma normal y habitual en el edificio de calle Balcarce 873/879 -posición n° 6-.

Por el contrario, el codemandado Soria no logró demostrar la justificación del empleo de la modalidad de jornada reducida respecto del Sr. Coronel. En consecuencia, considero que el trabajador se desempeñó en una jornada a tiempo completo, desempeñándose dos días de lunes a viernes de 20:00 a 06:00 hs., los días domingos de 07:00 a 19:00 hs, y además los días feriados de 08:00 a 20:00 hs. Así lo declaro.

3.2. Por otra parte en cuanto a las demás tareas realizadas por el actor, esto es control de funcionamiento de ascensores, limpieza de planta baja, ascensores y vereda de edificio, recolección de residuos en todos los pisos, entrega de correspondencia y repartos de diarios, boleta de impuestos y boletas de servicios a los departamentos del edificio; no se encuentra demostrado por el trabajador que haya realizado las mismas.

Si bien, en la dilucidación de la extensión de la jornada de trabajo, no obrando prueba en contrario, se le otorgó plena eficacia a la confesión ficta de la prueba confesional aportada por el actor, más aún que pesaba la carga de la prueba sobre el codemandado Soria probar el empleo de la excepción de la jornada reducida, no ocurre lo mismo respecto a las tareas del actor. Es así que, el peso de la carga de la prueba en este supuesto recae en el Sr. Coronel, y de pruebas analizadas surge prueba en contrario respecto de la prueba de absolución de posiciones antes citada, en especial al ser desestimadas las declaraciones de los tres testigos propuestos por el actor, por lo que éste no logró demostrar la realización de las demás tareas que habrían sido realizadas por él.

3.3. En efecto, no estando controvertido que el trabajador realizaba tareas de vigilancia, controlando el ingreso y egreso de personas y vehículos en una jornada completa, en el domicilio de edificio ubicado en Balcarce 879 de esta ciudad, desde el 02/06/2015; y teniendo en

cuenta las previsiones del CCT 589/10, estimo que la actividad desarrollada por el trabajador se ajusta a la categoría laboral de “Suplente de Jornada Completa” de la convención colectiva referida. En mérito a lo expuesto, el actor estuvo incorrectamente registrado.

En conclusión, de la plataforma fáctica probatoria y lo precedentemente reseñado, concluyo que el Sr. Coronel se desempeñó en una jornada de trabajo a tiempo completo -desempeñándose dos días de lunes a viernes de 20:00 a 06:00 hs., los días domingos de 07:00 a 19:00 hs, y además los días feriados de 08:00 a 20:00 hs.; y debió ser registrado y remunerado conforme a la categoría laboral de “Suplente de Jornada Completa” del CCT 589/10. Así lo declaro.

Segunda Cuestión

1. Controvierten las partes respecto a la extinción del contrato de trabajo: causa y justificación del despido.

1.1. El actor sostuvo que el día 20/05/2018 se apersonó ante el edificio para cumplir con sus tareas habituales, y el personal de seguridad que se encontraba allí le impidió el ingreso a su lugar de trabajo. Ante ello, remitió misivas 091772730 y 091772729 el 29/05/2018 al Consorcio de Propietarios y al Sr. Soria, por las cuales denunció su real situación laboral, tanto su fecha de ingreso, tareas y jornada laboral y solicitó se aclare su situación laboral.

Señaló que ante el silencio por parte de los demandados, el 26/06/2018 procedió a remitir epistolar por la cual comunicó que se consideraba despedido, e intimó el pago de conceptos indemnizatorios.

Posteriormente, señaló que el 02/07/2018 el Consorcio de Propietarios contestó luego de 34 días, y procedió a negar la relación laboral con el trabajador, el despido invocado, y adeudar suma y documentación alguna. Por otra parte, en misma fecha procedió a contestar el Sr. Soria, por la cual negó que haya incurrido en silencio e invocó que había convocado al trabajador a trabajar. Además, el Sr. Soria citó que actor a que se presentara al trabajar el día 04/07/2018 en un lugar distinto donde normalmente prestaba servicios el trabajador.

1.2. Por el contrario, el demandado - Consorcio de Propietarios- señaló que el Sr. Coronel no fue su empleado. Además, manifestó que el trabajador alegó que se le impidió ingresar el día 20/05/2015, y decide interpelar a las partes demandadas luego de 9 días, por lo que hizo un abandono de trabajo.

También, afirmó no haber recibido ningún telegrama de 091772730 del 29/05/2018, ni tampoco aviso de visita por parte del correo. En cuanto a la misiva nº 092795526, por la cual el trabajador se consideró despedido, procedió a reconocer su recepción.

1.3. El codemandado, el Sr. Soria, señaló que procedió a despedir sin causa al trabajador, el día 05/12/2018. Sin perjuicio de ello, reconoció que el actor se colocó en situación de despido indirecto el 26/06/2018, fecha en la cual se puso fin a la relación laboral entre las partes.

2. Las pruebas pertinentes y atendibles, acreditadas en autos, permiten tener probados los siguientes hechos:

2.2. De TCL CD N° 845174017 y TCL CD N° 845173935, ambas con fecha de imposición del 29/05/2018, surge que el actor solicitó se aclarara su situación laboral, en virtud de no habersele brindado tareas y prohibido la permanencia en su puesto de trabajo, desde el 20/05/2018.

Asimismo, manifestó que realizó tareas de seguridad, mantenimiento y limpieza, reparto de correspondencia y diarios en el inmueble ubicado en calle Balcarce 873; que su horario de trabajo fue los domingos y feriados y eventuales reemplazos, trabajando hasta 12 horas diarias, de 07:00 a 19:00 u 8:00 a 20:00.

Finalmente, intimó ello bajo apercibimiento de considerarse gravemente injuriado y despedido. Dicha misiva fue notificada al Consorcio de Propietarios y por el Sr. Soria en fechas 06/06/2018 y 31/05/2018, respectivamente, conforme surge de informe de correo argentino del 10/02/2021, que obra en el cuaderno de prueba A2.

2.3. De las CD N° 925078875, y CD N° 925078884, ambas con fecha de imposición del 26/06/2018, surge que el trabajador adujo que ante el silencio procedió considerarse gravemente injuriado y despedido sin justa causa.

Asimismo, intimó el pago de indemnización correspondiente, y a la entrega de certificados previstos en el art. 80 de la LCT, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 2 Ley 25323. Dichas misivas fueron recepcionadas por el Consorcio de Propietarios y por el Sr. Soria el 27/06/2018, conforme surge de informe de correo argentino del 10/02/2021.

2.4. De CD 924820733 del 02/07/2018, surge el demandado -Consorcio de Propietarios- procedió a negar lo vertido en

misiva 925078875. Especialmente, negó la existencia de la relación laboral con el Sr. Coronel, y que por lo tanto que procedería a considerarse despedido. Afirmó que el trabajador se desempeñó como empleado del Sr. Álvaro Soria.

2.5. De CD 924839054 del 02/07/2018, surge que el codemandado -Álvaro Soria- procedió a negar que hubiera incurrido en silencio, y que la registración del trabajador haya sido incorrecta. Señaló que intimó al trabajador a que se presentara a trabajar los días 17/06/2018, 20/06/2018 y 24/06/2018. Finalmente, citó al Sr. Coronel a que se presentara a trabajar el día 04/07/2018 a las 18 hs, en calle Córdoba 184.

2.6. De CD N° 769768701 del 31/10/2018, surge que el codemandado Soria intimó al actor a que se presentase a trabajar el día 05/11/2018.

2.7. De CD N° 963563824 del 05/12/2018, surge que el codemandado Soria procedió a despedir sin causa al trabajador.

Las restantes pruebas, las considero inconducentes para el esclarecimiento de la cuestión debatida, razón por la que se prescinde de su análisis *in extenso*.

3. A partir de la plataforma fáctica y probatoria expuesta, cabe resolver, primero, cuándo aconteció la finalización de la relación laboral, para así considerar la causa alegada por cada parte, ello conforme al principio que el contrato de trabajo no se extingue dos veces.

Al respecto destaco, que es requisito de la notificación la necesidad de que la parte (trabajador o empleador, según el caso) reciba efectivamente la comunicación de despido. Ello, en virtud de que el despido se consuma, cuando llega a la esfera jurídica del destinatario el conocimiento de la voluntad de extinguir el contrato de trabajo. En consonancia con lo expuesto, nuestro Máximo Tribunal local, sostuvo que “(...)Dado el carácter recepticio de las comunicaciones telegráficas, su contenido carece de efectos jurídicos hasta tanto sean recepcionadas por su destinatario o entren a la esfera de su conocimiento (...)”. (CSJT, “Toledo, Lautaro Roberto vs. Arzobispado de Tucumán y/o Arzobispado de la Provincia de Tucumán s/ Cobros”, sent. N° 228, 10/04/2014).

Ahora bien, atento a las constancias de autos y a las pruebas analizadas, considero que la extinción del vínculo laboral se produjo por despido indirecto ante el silencio del codemandado -Álvaro Soria- a la intimación del 29/05/2018, recepcionada el 31/05/2018 -según informe del Correo Argentino del 10/02/2021.

Ante dicho silencio, el actor procedió a comunicar que extinguía el vínculo laboral, por TCL impuesto el 26/06/2018, recepcionado por el codemandado el 27/06/2018. Siendo por lo tanto el 27/06/2018 la fecha a partir de la cual corresponde considerar que culminó el vínculo laboral entre el trabajador y el Sr. Álvaro Esteban Soria, de conformidad a la teoría recepticia de la comunicación.

Destaco que el codemandado Soria, si bien prestó conformidad con que la extinción del vínculo laboral se produjo por despido indirecto, también invocó que procedió a despedir al actor el 05/12/2018, por lo que siendo posterior a la fecha del despido indirecto sin causa anteriormente expuesto, estimo que analizar dicho modo de extinción del vínculo laboral carece de relevancia alguna.

Por otra parte, resalto que ante el expreso requerimiento de la actora en orden a que se garantice ocupación efectiva y continuidad del contrato de trabajo, bajo apercibimiento de despido, el codemandado guardó silencio, de modo que allí se tornó operativa la presunción contenida en el art. 57 de la LCT.

Por lo que la conducta de las partes durante la vigencia de la relación y también al momento de su ruptura, es elemento relevante a tener en cuenta al momento de sentenciar.

Es así que, ante un claro emplazamiento del trabajador, bajo apercibimiento de despido, la omisión del codemandado de responder es una actitud contraria a la buena fe que debe primar en toda relación laboral, y que revela que consintió la ruptura decidida por el actor, por las causales denunciadas por él, desde que los hechos que consideró injuriosos obligaban a la interpelada a manifestarse sobre ellos.

En consecuencia, atento al encontrarse acreditado el silencio del codemandado ante la intimación del trabajador, considero procedente y justificado el despido indirecto invocado por el actor, no sólo por imposibilitar la continuación de la relación laboral, sino porque violenta el deber de buena fe, previsto en el art. 63 LCT, y el deber de ocupación impuesto en el art. 78 LCT, que impide la prosecución de la relación contractual (art. 242 de la LCT), correspondiendo en consecuencia las indemnizaciones de Ley.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que obra convenio de pago de indemnización entre el Sr. Soria y el trabajador celebrado el 06/12/2018, por el que se acordó el pago de \$20.000 a favor de éste último, recibiendo en ese acto la suma de \$12.000, y no obra

constancia alguna del monto restante. Dicho comportamiento, y conforme a todo lo expuesto, importa un acto jurídico que causa estado, definiendo en forma inalterable la posición jurídica del codemandado Soria, conforme lo establece la teoría de los actos propios.

En conclusión, de la plataforma fáctica probatoria y lo precedentemente reseñado, la extinción del vínculo laboral se produjo por despido indirecto fundado en el silencio del codemandado -Álvaro Soria- al requerimiento del trabajador, por lo que el mismo se encuentra justificado, siendo el día de su perfeccionamiento el día 27/06/2018. Así lo declaro.

Tercera Cuestión

1. Defensa de prescripción.

1.1. La parte codemandada -Álvaro Soria- interpuso excepción de prescripción de la acción para el cobro de créditos de naturaleza laboral. Manifestó que la demanda por el cobro de pesos se inició el 23/08/2019, las diferencias salariales reclamadas con anterioridad al 24/08/2017 se encuentran prescriptas. Además, señaló que el actor no intimó fehacientemente por los períodos de diferencia salariales reclamados en la demanda, por lo que no existen actos suspendidos o interruptivos de la prescripción.

1.2. Corrido traslado de ley, la parte actora contesta solicitando el rechazo de la excepción, con expresa imposición de costas. Manifestó que el derecho al cobro de diferencias salariales le asiste al actor desde julio de 2016, por haber intimado mediante telegramas obrero n° 092795526 y 092795527 ambos del 26/06/2018, lo que suspendió el plazo de prescripción.

2. Analizadas las constancias de autos adelanto mi decisión en el sentido que corresponde rechazar la excepción de prescripción de la acción interpuesta por el codemandado, por las siguientes razones.

Según las constancias de autos el actor intimó el pago de conceptos indemnizatorios y no indemnizatorios y, especialmente, diferencias salariales, como así entrega de certificados previstos en el art. 80 de la LCT, mediante telegrama obrero del 26/06/2018, a los demandados. Además, el 22/08/2018 el trabajador inició reclamo en Secretaria de Estado de Trabajo.

Al respecto la normativa aplicable según el CCC, en su art. 2541 reza: *“El curso de la prescripción se suspende, por una*

sola vez, por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción.”

A su vez, el art. 257 de la LCT, establece:
“Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de seis (6) meses.”

De esta manera, podemos advertir que el actor mediante TCL del 26/06/2018 interpeló fehacientemente a los demandados. Como así también, inició reclamo administrativo el 22/08/2018 en contra del codemandado Soria. Por ende, el curso de la prescripción quedó interrumpido por el plazo de seis meses, por lo que tomando en consideración que la demanda fue interpuesta el 23/08/2019 conforme da cuenta el cargo de recepción de Mesa de Entradas, se concluye que la presente acción para el cobro de créditos de naturaleza laboral, y en especial el rubro de diferencias salariales del período de julio de 2016 a junio de 2018, no se encuentra alcanzada por la prescripción bienal del art. 256 de la LCT.

Nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia ha resuelto que corresponde aplicar el plazo de prescripción de dos años instituido en el art. 256 de la LCT a todos los derechos de origen laboral, incluidos aquellos regulados en la Ley 14546 (sentencia n° 562, del 29/12/1993, Espinosa José Antonio vs. Intersimone Natalio Alfredo s/ indemnización por antigüedad).

En mérito a los fundamentos expuestos, corresponde rechazar la excepción de prescripción deducida por el codemandado Alvaro Soria. Así lo declaro.

Cuarta Cuestión

1. Pretende el actor el pago de la suma de \$366.161,42 (pesos trescientos sesenta y seis mil ciento sesenta y uno con 42/100), con más sus intereses, gastos y costas por los conceptos de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional 2018, vacaciones proporcionales 2018, integración mes de despido, SAC s/ integración y preaviso, arts. 1 y 2 Ley 25323, y diferencias salariales de julio de 2016 a junio de 2018.

La parte demandada niega adeudar suma alguna por ningún concepto, a tenor de lo normado por la LCT.

Al respecto destaco, que surge de actuaciones administrativas de la Secretaría de Estado de Trabajo - acompañada por el actor como prueba documental y no impugnada por el Sr. Soria-, que el 06/12/2018 se celebró con convenio de pago de indemnización entre el codemandado Álvaro Esteban Soria y el actor, por el cual se acordó el pago de \$20.000 a favor de éste último. Sin perjuicio del monto acordado, surge que el trabajador sólo recibió la suma de \$12.000, en el mes de diciembre de 2018. En consecuencia, considero que dicho pago se reputará a cuenta del total de la deuda que a continuación se detallará.

Conforme el Art. 214, inciso 5 del CPCYC (supl.) se analizarán cada concepto pretendido por separado.

Indemnización por antigüedad y preaviso : atento lo resuelto precedentemente, y lo normado por el art. 245 y 232 de la LCT, corresponde el progreso de los presentes rubros.

SAC proporcional 2018 : atento a que constituye un verdadero derecho de los trabajadores y conforme a lo expresamente previsto en el art. 123 de la LCT, este rubro remunerativo surge como consecuencia del contrato de trabajo cualquiera fuera la causal de extinción, el mismo deviene procedente.

Vacaciones proporcionales 2018: corresponde el progreso del presente rubro, conforme a lo dispuesto por el art. 150 de la LCT.

Integración mes de despido : atento lo expuesto precedentemente, teniendo en cuenta la fecha del despido (27/06/2018) y lo normado por el art. 233 de la LCT, corresponde su progreso.

SAC s/ integración mes de despido: Teniendo en cuenta lo resuelto anteriormente, el rubro reclamado resulta procedente, atento a lo dispuesto por el art. 233 de la LCT.

SAC sobre preaviso : conforme a la interpretación armónica de los arts. 121 y 232 de la LCT, el trabajador tiene derecho a este concepto.

Art 1° Ley 25323: el actor no tiene derecho a percibir esta indemnización pues, de conformidad a lo establecido por la jurisprudencia, el deficiente registro laboral debe referirse exclusivamente a las situaciones contempladas en los Arts. 7, 8 y 10 de la Ley 24013, lo que no representa el caso de autos.

En efecto, "*La armónica interpretación de los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley 24.013 y el artículo 1 de la Ley 25.323, exige*

limitar el ámbito de aplicación de éste último a los casos explícitamente descriptos en la Ley 24.013, es decir, a) cuando la falta de registro fuera total, b) cuando la falta de registración involucre una posdatación de la fecha de ingreso y, c) cuando la falta de registro implique que se hubiera consignado en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador". (CSJT, Sentencia n° 472 del 30/06/10. "Toro José Alejandro vs. Bayton S.A. y otro s/cobro de pesos").

En la causa, no se configura ninguno de los supuestos expuestos, por lo que la relación laboral se encontraba registrada correctamente, conforme lo expuesto precedentemente. En consecuencia, la irregularidad referida a la registración de la jornada de trabajo no se encuentra aprehendida dentro del concepto legal de estudio.

Art. 2 Ley 25323: el trabajador no tiene derecho a este concepto, porque no se encuentra probado que cumplió con la intimación de pago a la demandada vencido el plazo de cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo. Así lo declaro.

Diferencias salariales de julio de 2016 a junio de 2018: atento lo resuelto en la primera y tercera cuestión, corresponde el progreso de las diferencias solicitadas del periodo de julio de 2016 a junio de 2018, conforme lo peticiona el actor en su planilla de rubros. Así lo declaro.

Pluspetición inexcusable: el codemandado- el Sr. Álvaro Esteban Soria- solicita se condene a la parte actora por pluspetición inexcusable, lo que es rechazado por el accionante.

Puede sostenerse en general que tal calificación corresponderá a los supuestos que el actor por temeridad o negligencia grave al punto que resultare injustificable, haya pedido más de lo que en derecho le correspondía. Cabe destacar que en principio se desvirtúa el carácter de inexcusable de la pluspetición cuando el actor condiciona el quantum de la pretensión a lo que en más o en menos resulte de las pruebas que se rindan (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, Arazi y Rojas, T. 1, p. 294).

Analizada la cuestión estimo improcedente lo peticionado por no encuadrarse en el caso de los supuestos previstos en el art. 65 del CPCYC, en virtud que lo reclamado por el actor es admisible parcialmente, conforme a lo tratado en las cuestiones precedentes. Así lo declaro.

Quinta Cuestión

1. El actor solicita la responsabilidad solidaria del Consorcio de Propietarios del Edificio Calle Balcarce 873/879, por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo mantenido entre el Sr. Coronel y Sr. Soria.

Al respecto, señaló que ingresó a trabajar en el edificio del demandado Consorcio de Propietarios el 02/06/2015, como portero suplente de jornada completa, según la categoría prevista en el art. 7 del CCT 589/10.

Manifestó que cumplió sus prestaciones laborales en el domicilio del edificio, en calle Balcarce al 873/879 de esta ciudad, siendo ellas el control de acceso de personas al edificio, control de elementos de seguridad del edificio, control del funcionamiento de los ascensores, limpieza del hall de acceso, de la planta baja, los ascensores y vereda del edificio, entre otras.

Afirmó que son solidariamente responsables el Sr. Soria como así también el Consorcio de Propietarios, ya que éste fue el que se benefició de las laborales realizadas por él, conforme a lo previsto en los art. 29 y 29 bis.

1.1. Por su parte, el demandado -Consorcio de Propietarios- en su responde negó que el actor haya sido su empleado, y que haya realizado tareas referidas a la portería o algo similar. Señaló que no hubo interposición de sujetos, siendo el único responsable de la relación laboral el Sr. Soria. Asimismo, afirmó que el actor fue registrado como empleado del Sr. Álvaro Soria, quien se desempeñó como administrador del consorcio demandado, hasta el 04/01/2017.

1.2. El codemandado -Álvaro Soria- afirmó que contrató al actor en fecha 02/06/2015 para desempeñarse laboralmente en el edificio ubicado en calle Balcarce 873/879, para la realización de tareas de seguridad y vigilancia, controlando el ingreso y egreso de personas y vehículos. Señaló que la jornada laboral del actor fue únicamente los días domingos de 07:00 a 19:00 hs.

Asimismo, el Sr. Soria manifestó que el codemandado contaba con personal de portería, por lo que él se encargaba de proveer al consorcio de tres personas que se realizaban la vigilancia del mismo. Finalmente, negó que existiera solidaridad con el consorcio de propietarios, en virtud del art. 29 y 29 bis bis, ello por inexistencia de créditos a favor del actor.

2. De las pruebas obrantes en autos resulta lo siguiente:

2.1. El codemandado Álvaro Soria, en su contestación de la demanda, reconoció expresamente que el Sr. Coronel prestaba tareas de seguridad y vigilancia, controlando el ingreso y egreso de personas y vehículos, en el edificio ubicado en calle Balcarce 873/879 de esta ciudad, desde el 02/06/2015, y además reconoció haberse desempeñado como administrador del consorcio de propietarios.

2.2. De la prueba de absolución de posiciones, que obra en el cuaderno de prueba A6, el demandado- Consorcio de Propietarios- no compareció a la audiencia confesional, lo que hace aplicable el art. 360 del CPCYC (supletorio), que permite tener por confeso al mismo de las posiciones del pliego, en especial por no obrar prueba en contrario. En específico, se tiene como cierto que el actor prestó servicios como portero en el edificio de consorcio de propietarios de calle Balcarce 873/879 desde mediados del año 2015 hasta mayo de 2018- posición n° 2-; que el sr. Coronel cumplía funciones como portero en edificio ubicado en Balcarce 873/879 todos los días domingos, feriados, algunos días hábiles durante la semana, dos o tres días durante la semana en forma normal y habitual- posiciones n° 3, 5 y 6-.

La doctrina que comparto tiene dicho que la confesión ficta produce los mismos efectos que la confesión expresa, vale decir, que resulta suficiente para tener por probados los hechos consignados en el pliego de posiciones. Sin embargo, no reviste como la segunda, el carácter de prueba tasada, ya que la ley faculta al juez a tenerla por configurada teniendo en cuenta las circunstancias de la causa, lo cual implica que es susceptible de desvirtuarse por prueba en contrario producida por los absolventes” (De Santos; La prueba judicial, Teoría y Práctica; Edit. Universidad; 1992, p. 296).

Las restantes pruebas, las considero inconducentes para el esclarecimiento de la cuestión debatida, razón por la que se prescinde de su análisis *in extenso*.

3. Conforme al principio de que los jueces conocen el derecho (*iura novit curia*), corresponde darle el correcto encuadre legal a la solicitud de responsabilidad solidaria en contra del demandado Consorcio de Propietarios Edificio Calle Balcarce 873/879 (arts. 128 del CPCYC y 47 del CPL).

En efecto, destaco que el art. 29 de la LCT (invocado por el actor), prevé el caso del contratista de mano de obra que suministra trabajadores a otras empresas (usuarias), en cuyo caso ambas se consideran empleadoras del trabajador, siendo responsablemente solidarias por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Así la empresa suministradora de mano obra contrata a los trabajadores con vistas a proporcionarlos a la empresa usuaria, cuyas actividades o prestaciones, pueden o no estar dentro de la actividad normal y específica de esta, según lo cual, quedarían o no, comprendidas en la norma del art. 30 de la LCT.

Por su parte, el art. 30 de la LCT instaura un supuesto de solidaridad pasiva de fuente legal. A través de ella, el legislador busca ampliar el espectro de patrimonios deudores respecto de los cuales puede asirse el trabajador para obtener la satisfacción de los créditos emergentes de la relación o contrato de trabajo con su empleador, el que estimo es aplicable al presente caso.

Es así que, para que proceda la sanción contenida en el art. 30 LCT, es menester la concurrencia de los siguientes presupuestos de responsabilidad: 1) que los contratistas, subcontratistas o cedentes registren deudas de origen laboral o de la seguridad social respecto de sus trabajadores; 2) que los contratistas o subcontratistas realicen trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento y; 3) que dicha deuda se refiera a trabajadores que se ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios.

Cabe tener en cuenta entonces que, cuando se contrata a otro, lo que en realidad se está haciendo es tercerizar una actividad que es propia y específica, pues coadyuvan al fin empresarial.

Ahora bien, como es sabido, un consorcio de propietarios se encarga de la administración de las unidades funcionales de un edificio sometido en principio al régimen de propiedad horizontal. A su vez, un consorcio cuenta con trabajadores que prestan servicios de manera habitual para el mismo.

En el presente caso, conforme surge de informe obrante en cuaderno de prueba D2, que el Consorcio de Propietarios se encuentra registrado en AFIP, como persona jurídica que tiene como actividad económica la prestación de servicios de consorcios de edificios; y que dicho consorcio cuenta con otros empleados que realizan tareas de portería o similar.

Además, el actor afirmó realizar tareas de suplencia de otros porteros titulares del edificio ubicado en Balcarce 873/879; por su parte el codemandado Soria afirmó que el edificio contaba con personal de portería contratado por el consorcio, y él proveía tres personas al mismo que se encargaban de la vigilancia. A su vez, todo ello no fue negado por el demandado Consorcio de Propietarios.

Asimismo, conforme lo reconocido por los demandados, el Sr. Soria fue administrador del edificio ubicado en calle Balcarce 873/879 de esta ciudad; que el citado contrató al actor como trabajador bajo su dependencia; y en específico el sr. Soria reconoció que el Sr. Coronel prestó tareas de seguridad y vigilancia, controlando el ingreso y egreso de personas y vehículos, en el domicilio del edificio ubicado en Balcarce 879 de esta ciudad, desde el 02/06/2015.

En efecto, de lo expuesto entiendo que es evidente la existencia de una estructura triangular en la relación laboral que, naturalmente, suele ser dual. Por lo que, se presume que entre las partes accionadas medió un contrato de locación de servicios o subcontratación de las actividades normales, específicas y propias que hacen al giro comercial del demandado- Consorcio de Propietarios-.

Así, no caben dudas que estamos en presencia de la responsabilidad solidaria que emerge del art. 30 de la LCT, toda vez que el actor prestaba funciones y tareas que hacen a la naturaleza de actividad normal, propia y específica que cuenta un consorcio de propietarios.

Del análisis de lo expuesto, estimo que sin la labor realizada por el Sr. Coronel, el codemandado no podría cumplir sus fines, por lo que resulta ser una actividad inescindible para la consecución de su objetivo, constituyendo una unidad técnica de ejecución con aquella.

De ello se colige, que resulta responsable el codemandado Consorcio de Propietarios Edificio Calle Balcarce 873/879, conforme a las prescripciones del art. 30 último párrafo de la LCT, por ser quien se benefició en forma directa con los servicios del actor, en tanto debió controlar que la demandada lo registrara debidamente y le abonara sus remuneraciones conforme a las escalas salariales vigentes, lo que no hizo en autos, implicando ello un grave incumplimiento de sus obligaciones de control sobre la empleadora directa, burlando los derechos del actor respecto de los rubros salariales e indemnizatorios que podían corresponderle.

Por lo antes expuesto, se torna operativa la 2° parte del art. 30 de la LCT que prescribe que “(...) Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número de Código único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social(...).”

En tal sentido, la jurisprudencia que comparto, ha dicho que: “la obligación de control que se establece en la hipótesis de tercerización establecida en el Art. 30 LCT descarta toda posibilidad de ajenidad del cesionario respecto de las obligaciones laborales y de la seguridad social por el subcontratista”. (CNAT. Sala VI Expte. N° 16952/07 sent. 61033, 28/11/08: “González Duarte, Victoria c/ Garbarino S. y otro- s/Despido” (Fernández Madrid - Fontana).

En consecuencia y, en base a todo lo expuesto, corresponde extender la responsabilidad de modo solidario al demandado Consorcio de Propietarios Edificio Balcarce 873/879 en los términos del art. 30 LCT. Así lo declaro.

Intereses: Atento a la doctrina fijada por la SCJT, en autos “Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo s/ Daños y Perjuicios”, sentencia N° 937/2014, del 23/09/2014, en la que se establece que el procedimiento para el cálculo de los intereses constituye una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces, dejando sin efecto el estatus de doctrina legal establecido por el mismo Tribunal en el caso “Galletini Francisco vs. Empresa Gutiérrez SRL s. Indemnizaciones”, sentencia N° 443, del 15/06/2004, propongo la aplicación al caso de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del

Banco de la Nación Argentina, desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.

Ello por entender que dicha tasa es la que corresponde a las circunstancias socio económico actual, tal como lo han entendido numerosos tribunales en todo el país. Así, por caso, las Cámaras Nacionales del Trabajo, mediante acta N° 2357/2002, del 7 de mayo de 2002, en la que se dispuso su vigencia a partir del 6 de enero de 2002, y el plenario *"Samudio de Martínez c/ Transportes 260 SA s/ daños y perjuicios"*, del 20/04/2009, de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil.

En efecto, y tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: *"Una tasa -como la pasiva-, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda. Es por ello, que la tasa de interés debe cumplir, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable. Al tratarse de deudas reclamadas judicialmente debe existir un plus por mínimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad"* ("Amaya, Osvaldo D. c/Boglioli, Mario" del 12/9/05; LL Gran Cuyo, 2005 -octubre-, 911-TySS2005, 747-IMP2005-B, 2809)".

La tasa pasiva del BCRA no cumple con los fines y propósitos resarcitorios de los intereses ya que no representa fielmente el incremento de las remuneraciones, determinando, como consecuencia, que el acreedor laboral (que es un sujeto de preferente tutela constitucional -art. 14 bis CN- y en los tratados sobre derechos humanos -art. 75.22 CN-) vea menguado su crédito, con claro conculcamiento de las garantías de igualdad ante la ley (art. 16 CN); de propiedad (art. 17 CN) y de indemnidad (art. 19). Por otra parte, el "quantum" de la tasa pasiva, que se venía aplicando hasta ahora en los tribunales locales, no sólo no logra realizar la justicia del caso sino que, como resultado, premia el incumplimiento como conducta social (Drucaroff Aguiar, Alejandro, "La modificación del plenario Uzal. Una cuestión esencial no resuelta", La Ley, 4/9/03).

Por lo demás, la aplicación de la tasa activa no es incompatible con la prohibición de indexar establecida por las Leyes 23928 y 25561, ya que no debe interpretarse que la tasa de interés deba divorciarse de la realidad, ni de los principios constitucionales de justicia, equidad, protección al trabajo y propiedad, a los que debe subordinarse,

puesto que una ley jamás puede prevalecer sobre la Carta Magna.

Por ello, se dispone aplicar al caso la tasa de interés precedentemente referenciada. Así lo considero.

Planilla de Capital e Intereses

Ingreso 02/06/2015
Egreso 27/06/2018
Antigüedad 3 años y 25 días

CCT: 589/10
Categoría: Suplente de jornada completa
Jornada: (13 días) Domingos, 2 días semanales y feriados

Remuneración al distracto

Básico	\$ 10.704,20
Antigüedad	\$ 1.109,70
Total	\$ 11.813,90

1) Indemnización por antigüedad	
\$ 11.813,90 x 3 años	\$ 35.441,70
2) Indemnización Sustitutiva de Preaviso	
\$ 11.813,90 x 1 mes	\$ 11.813,90
3) SAC s/ Preaviso	
\$ 11.813,90 / 12	\$ 984,49
4) Integración Mes de Despido	
\$ 11.813,90 / 30 x 3 días	\$ 1.181,39
5) SAC / Integración Mes de Despido	
\$ 1.181,39 / 12	\$ 98,45
6) Vacaciones proporcionales 2018	
\$ 11.813,90 / 25 x 177 /360 x 14	\$ 3.252,76
7) SAC proporcional 2do semestre 2018	
\$ 11.813,90 / 360 x 177	\$ 5.808,50
Total rubros 1 a 7	\$ 58.581,19
Interés tasa activa BNA desde 03/07/18 al 05/12/18	22,02% \$ 12.899,93
Menos percibido a cuenta de intereses el 15/12/18	\$ -12.000,00
Tasa activa BNA desde 06/12/18 al 31/10/22	188,86% \$ 110.638,84
Total rubros 1 a 7 en \$ al 31/10/2022	\$ 170.119,96

8) Diferencias salariales julio 2016 a junio 2018. 2do SAC 2016. SAC 2017

Remunerac.	jul 16 a nov 16	dic 16 a may 17	jun 17 a jul 17	ago 17 a dic 17	ene 18 a mar 18
Básico	\$ 7.046,00	\$ 7.891,00	\$ 8.680,10	\$ 9.548,50	\$ 9.911,20
Antigüedad	\$ 243,50	\$ 272,70	\$ 600,00	\$ 660,00	\$ 685,00
	\$ 7.289,50	\$ 8.163,70	\$ 9.280,10	\$ 10.208,50	\$ 10.596,20

Remunerac.	abr 18 a may 18	jun-18
Básico	\$ 10.704,20	\$ 10.704,20
Antigüedad	\$ 739,80	\$ 1.109,70
	\$ 11.444,00	\$ 11.813,90

Período	Percibió	Debió Percibir	Diferencia	% Tasa activa BNA al 31/10/22	Intereses al 31/10/22
jul-16	\$ 2.710,00	\$ 7.289,50	\$ 4.579,50	260,95%	\$ 11.950,16
ago-16	\$ 2.168,00	\$ 7.289,50	\$ 5.121,50	258,23%	\$ 13.225,19
sep-16	\$ 2.168,00	\$ 7.289,50	\$ 5.121,50	255,60%	\$ 13.090,50
oct-16	\$ 2.168,00	\$ 7.289,50	\$ 5.121,50	253,16%	\$ 12.965,53
nov-16	\$ 2.168,00	\$ 7.289,50	\$ 5.121,50	250,94%	\$ 12.851,84
dic-16	\$ 2.511,65	\$ 8.163,70	\$ 5.652,05	248,67%	\$ 14.054,89
2do SAC 16	\$ 1.255,50	\$ 4.081,85	\$ 2.826,35	248,67%	\$ 7.028,25
ene-17	\$ 2.428,00	\$ 8.163,70	\$ 5.735,70	246,56%	\$ 14.141,88
feb-17	\$ 2.496,15	\$ 8.163,70	\$ 5.667,55	244,72%	\$ 13.869,57
mar-17	\$ 2.428,00	\$ 8.163,70	\$ 5.735,70	242,68%	\$ 13.919,34
abr-17	\$ 3.035,00	\$ 8.163,70	\$ 5.128,70	240,71%	\$ 12.345,24
may-17	\$ 2.428,00	\$ 8.163,70	\$ 5.735,70	238,67%	\$ 13.689,33
jun-17	\$ 2.428,00	\$ 9.280,10	\$ 6.852,10	236,70%	\$ 16.218,85
1er SAC 17	\$ 1.517,50	\$ 4.640,05	\$ 3.122,55	236,70%	\$ 7.391,04
jul-17	\$ 3.335,00	\$ 9.280,10	\$ 5.945,10	234,66%	\$ 13.950,71
ago-17	\$ 2.938,00	\$ 10.208,50	\$ 7.270,50	232,63%	\$ 16.913,29
sep-17	\$ 2.938,00	\$ 10.208,50	\$ 7.270,50	230,65%	\$ 16.769,33
oct-17	\$ 2.938,00	\$ 10.208,50	\$ 7.270,50	228,62%	\$ 16.621,74
nov-17	\$ 3.006,15	\$ 10.208,50	\$ 7.202,35	226,49%	\$ 16.312,53
dic-17	\$ 3.740,65	\$ 10.208,50	\$ 6.467,85	224,21%	\$ 14.501,50
2do SAC 17	\$ 1.836,25	\$ 5.104,25	\$ 3.268,00	224,21%	\$ 7.327,15
ene-18	\$ 3.740,65	\$ 10.596,20	\$ 6.855,55	221,92%	\$ 15.213,76
feb-18	\$ 3.740,65	\$ 10.596,20	\$ 6.855,55	219,85%	\$ 15.071,85
mar-18	\$ 3.006,15	\$ 10.596,20	\$ 7.590,05	217,56%	\$ 16.512,83
abr-18	\$ 3.117,65	\$ 11.444,00	\$ 8.326,35	215,34%	\$ 17.929,87
may-18	\$ 2.863,55	\$ 11.444,00	\$ 8.580,45	212,73%	\$ 18.253,10
jun-18	\$ 1.524,80	\$ 11.813,90	\$ 10.289,10	210,00%	\$ 21.607,00
			\$ 164.713,75		\$ 383.726,27
Total de diferencias salariales					\$ 164.713,75
Total de intereses					\$ 383.726,27
Total Rubro 8 en \$ al 31/10/2022					\$ 548.440,02

Demanda prospera por: $\frac{\text{Capital rubros que prosperan}}{\text{Capital demanda}} \times 100$ 59,05%

Resumen de condena

Total rubros 1 a 7 en \$ al 31/10/2022	\$ 170.119,96
Total Rubro 8 en \$ al 31/10/2022	\$ 548.440,02
Total condena en \$ al 31/10/2022	\$ 718.559,98

Costas: Teniendo en cuenta los rubros por los que progresa la acción las costas se imponen en la siguiente proporción: la demandada deberá soportar sus propias costas, más el 80% de las devengadas por el actor, debiendo éste último cargar con el 20% de las propias (art. 63 del CPCYC supletorio al fuero). Así lo declaro.

Honorarios: Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inciso “b” de la Ley 6204.

Atento el resultado arribado en la causa y la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inciso “a” de la citada

Ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto de condena al 31/10/2022, que resulta la suma de \$718.559,98.

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 38, 42, 59 y concordantes de la Ley 5480 y 50 y 51 del CPL, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley 24432 ratificada por Ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1) A los letrados Gerardo Joaquín Arch (MP 4297) y Raúl Agustín Basilio (MP 7752), por su actuación sucesiva (art. 12 Ley 5480) en el doble carácter por el actor, el 14% de la base de regulación con más el 55%, que resulta la suma de \$155.927,52 (pesos ciento cincuenta y cinco mil novecientos veintisiete con 52/100). La distribución del presente honorario, de acuerdo a la actuación de los letrados (cada uno en una etapa y media del proceso de conocimiento) será del 50% para cada uno, lo que equivale a la suma de \$77.963,76 (pesos setenta y siete mil novecientos sesenta y tres con 76/100).

2) A la letrada María Beatriz Gallo (MP 4953), por su actuación en el doble carácter por el demandado Consorcio de Propietarios Edificio Calle Balcarce 873/879, durante tres etapas del proceso principal, el 8% de la base de regulación con más el 55%, equivalente a la suma de \$89.101,44 (pesos ochenta y nueve mil ciento uno con 44/100).

3) Al letrado Diego Ezequiel Guzmán (MP 5779), por su actuación en el doble carácter por el codemandado Álvaro Esteban Soria, durante tres etapas del proceso principal, el 8% de la base de regulación con más el 55%, equivalente a la suma de \$89.101,44 (pesos ochenta y nueve mil ciento uno con 44/100).

4) Al CPN Oscar Dante Sosa por el trabajo pericial realizado en el cuaderno de prueba A5 y C5, ofrecido por la parte actora y el demandado respectivamente, el 3% de la base de regulación, que resulta la suma de \$21.556,80 (pesos veintiún mil quinientos cincuenta y seis con 80/100).

Por ello,

RESUELVO

I- RECHAZAR el planteo de prescripción realizado por el codemandado, conforme lo considerado.

II- RECHAZAR el planteo de pluspetición inexcusable realizado por el codemandado, conforme lo considerado.

III- ADMITIR PARCIALMENTE la demanda promovida por Ángel Damián Coronel, argentino, DNI nº 33.977.037, con domicilio real en La Rioja Este 404, Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, en contra Consorcio de Propietarios Edificio Calle Balcarce 873/879, con domicilio en calle Balcarce 873 de esta ciudad, y de Álvaro Esteban Soria, DNI Nº 23.117.459, con domicilio en Córdoba 184, de esta ciudad; en consecuencia **CONDENAR SOLIDARIAMENTE** a los demandados al pago de la suma total de **\$718.559,98 (pesos setecientos dieciocho mil quinientos cincuenta y nueve con 98/100)** en concepto de Indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional 2018, vacaciones proporcionales 2018, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, SAC sobre preaviso, y diferencias salariales de julio de 2016 a junio de 2018.

IV- ABSOLVER, a los accionados de lo reclamado en concepto de multas art. 1 y 2 Ley 25323, conforme se considera.

V- COSTAS, conforme a lo considerado.

VI- HONORARIOS: 1) Al letrado Gerardo Joaquín Arch (MP 4297), la suma de \$77.963,76 (pesos setenta y siete mil novecientos sesenta y tres con 76/100); 2) Al letrado Raúl Agustín Basilio (MP 7752), la suma de \$77.963,76 (pesos setenta y siete mil novecientos sesenta y tres con 76/100); 3) A la letrada María Beatriz Gallo (MP 4953), la suma de \$89.101,44 (pesos ochenta y nueve mil ciento uno con 44/100); 4) Al letrado Diego Ezequiel Guzmán (MP 5779), la suma de \$89.101,44 (pesos ochenta y nueve mil ciento uno con 44/100); 5) Al CPN Oscar Dante Sosa, la suma de \$21.556,80 (pesos veintiún mil quinientos cincuenta y seis con 80/100).

VII- PLANILLA FISCAL , oportunamente practicar y hacer reponer (Art. 13 Ley 6204).

VIII- COMUNICAR a la Caja Previsional de Abogados y Procuradores de Tucumán.

REGISTRAR, ARCHIVAR Y HACER SABER 1080/19.KGE

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=KUTTER Guillermo Ernesto, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20218946829, Fecha:18/11/2022;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>